1609-1

El éxito final de esta instancia sólo se logrará encontrando los restos de los detenidos-desaparecidos

Los desafíos tras la Mesa de Diálogo



José Zalaquett

El abogado y profesor de Derechos Humanos y Etica Política que integró la Mesa de Diálogo desde su fundación, hace nueve meses, asegura que si la fórmula acordada para encontrar a los detenidos-desaparecidos no da resultados, "ello afectará la credibilidad de las Fuerzas Armadas y Carabineros, del Gobierno y de la propia Mesa".

Ahora que finalmente logramos acuerdo en la Mesa de Diálogo, nos asalta la tentación de hacerle caso a Shakespeare ("Todo está bien si termina bien") y a Lucho Gatica ("No me platiques ya, lo que debió pasar"). Dan ganas de limitarse a valorar este significativo avance hacia la reconciliación y no hacer demasiados análisis sobre lo que pudo ser.

Sin embargo, si cedemos a esa tentación estaríamos ignorando dos hechos fundamentales. El primero es que el largo proceso de gestación del acuerdo fue tan importante como el resultado. El segundo punto es evidente: el diálogo mismo puede haber terminado bien (estoy convencido de ello, aunque tomo nota de algunas opiniones en contrario), pero ahora se abre una nueva y compleja etapa. Para entender lo que queda por delante y cómo enfrentarlo debemos examinar cuidadosamente el camino recorrido.

Bien sabemos que todo comenzó con un grave quiebre de nuestra convivencia democrática y de los principios éticos fundantes de toda sociedad civilizada. La declaración de la Mesa se hace cargo tanto de las responsabilidades de quienes propiciaron la violencia con anterioridad al golpe de Estado de 1973, como de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante el gobierno militar. A partir de ello proclama (aunque con otras palabras) un "Nunca más"

1609-2
JOSE ZALAQUETT

político y un "Nunca más" humanitario: jamás debieran repetirse en nuestro país los intentos de legitimar la violencia como método de acción política ni las violaciones a los derechos humanos.

Hay, en ambos extremos del espectro político, quienes han creído ver en esos párrafos una especie de empate de culpas que, o bien rechazan, o bien les interesa enfatizar. Nada más lejos del espíritu que nos animó y así lo ha comprendido la gran mayoría del país, que ha sabido leer nuestro texto. Son responsabilidades de distinto carácter, que no están vinculadas por una relación de causa-efecto ni se anulan recíprocamente. Si se mencionan en un mismo documento no es por un afán de equipararlas, sino porque así lo demanda la misión que todos tenemos de refundar nuestra convivencia sobre bases éticas.

¿Refundar? Esta palabra ha ido ganando terreno en el debate que tiene lugar en muchos países que han atravesado por conflictos armados internos, dictaduras y otras formas de quiebre radical de la convivencia. La completa superación de esos hondos traumas nacionales puede tomar mucho tiempo, incluso el paso de dos o más generaciones. Sin embargo hay un período crítico, llamado de transición, durante el cual es preciso llevar a cabo un esfuerzo visible, solemne, de reconstrucción moral, que sirva de sustento para el futuro.

La refundación ética de la política consiste en renovar expresamente el pacto social que fue quebrantado, admitiendo culpas y errores, extrayendo lecciones del pasado y reafirmando principios fundamentales de ética democrática, como la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la sujeción de todos al imperio del derecho.

La refundación moral no es un proceso fácil, como lo hemos podido comprobar los chilenos a lo largo de los últimos años. La verdad duele, especialmente si arroja una sombra de culpa y vergüenza sobre nuestras intensas lealtades de grupo. Sospechamos del adversario y tememos que si admitimos nuestras responsabilidades le estaríamos entregando argumentos para justificar sus propias faltas o nuevas armas para atacarnos.

Pese a estas dificultades, el país había logrado algunos avances significativos en el proceso de reconstrucción moral, sobre todo durante la presidencia de Patricio Aylwin. El Informe Rettig reveló la práctica sistemática de desapariciones, asesinatos y tortura por parte de la DINA y otros órganos del gobierno militar; también detalló los asesinatos políticos perpetrados por opositores del régimen. Esta verdad terminó siendo reconocida por el conjunto de las fuerzas políticas. Además se establecieron medidas de reparación moral y material para los familiares de las víctimas y se hizo justicia en algunos casos significativos.

El sinuoso camino de la mesa

21 de agosto: Se constituye la mesa de diálogo, iniciativa impulsada por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma. En la instancia se reúnen por primera vez representantes militares y abogados de los familiares de detenidos desaparecidos. En la ocasión, la abogado Pamela Pereira se niega a darle la mano a los uniformados.

28 de octubre: Primer *impasse* de la mesa: abogados de derechos humanos manifiestan su molestia por la invitación a exponer al cientista político Alfredo Joignant, a la historiadora Lucía Santa Cruz y al subsecretario de Aviación, Angel Flisfisch.

20 de enero: Las Fuerzas Armadas proponen liberar de responsabilidades penales a quienes entreguen información. Abogados de derechos humanos rechazan la iniciativa.

29 de febrero: La mesa, tras un receso veraniego y con la perspectiva del inminente regreso de Pinochet, vuelve a sesionar.

2 de marzo: Nueva sesión de la mesa en base a un borrador de acuerdo elaborado por el comité redactor, el que contempla sanciones a quienes no entreguen información. Expectativa de solución final.

3 de marzo: El general Pinochet regresa a Chile. Abogados de derechos humanos rechazan la recepción al senador vitalicio y manifiestan que en esas condiciones no es posible firmar un acuerdo. Comienza un período de desconfianza y retroceso.

8 de marzo: Tras la imposibilidad de llegar a un documento consensuado, el ministro Pérez Yoma sólo entrega al Presidente Frei cuatro tomos con el trabajo realizado.

17 de marzo: El ex ministro Pérez Yoma informa a la UDI de los contenidos del preacuerdo reservado que debía haberse firmado. El hecho genera fuertes críticas de los abogados de derechos humanos.

28 de marzo: El nuevo ministro de Defensa, Mario Fernández, anuncia el relanzamiento de la mesa y asigna al científico Claudio Teitelboim la tarea de buscar acuerdos.

18 de mayo: Se conocen algunos aspectos del documento reservado de las Fuerzas Armadas. En él, los uniformados plantean una especie de "empate moral" entre la Unidad Popular y los militares.

6 de junio: "Fuerzas morales" de la mesa entregan al ministro Fernández una propuesta consensual. En tanto, la abogado Pamela Pereira plantea su fórmula para que las Fuerzas Armadas reconstruyan la información.

7 de junio: Se reúne la mesa en un ambiente revitalizado, para trabajar sobre ambas propuestas. El apoyo expreso del Presidente Lagos le da un nuevo impulso a la instancia. El trabajo entra en la recta final.

12 de junio: El día cúlmine. Después de intensas horas, en la madrugada del martes 13, se firma el histórico acuerdo final.

13 de junio: El documento final es entregado al Presidente Lagos en la Moneda, con la presencia de todos los integrantes de la mesa y de otros actores políticos.

La detención de Pinochet

Hacia octubre de 1998, cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres, subsistían, sin embargo, tres graves problemas pendientes: todavía no se recuperaban los restos ni se dilucidaba la suerte sufrida por cerca de 1.000 desaparecidos. Las Fuerzas Armadas aún no reconocían la verdad que el resto del país había aceptado. Los tribunales de Justicia seguían investigando un gran número de casos de violaciones de derechos humanos, sin lograr grandes avances; por ello, los familiares de las víctimas sentían que la justicia se dilataba, en tanto que los militares reclamaban la aplicación de la amnistía de 1978.

No se puede dudar que la detención de Pinochet en Londres colocó una nota de premura a la solución de estos problemas pendientes, pero pienso que sin mediar ese hecho, de todos modos habrían tenido que enfrentarse, aunque quizás no tan intensamente ni tan pronto.

Una visión simplista supone que esta nueva urgencia tenía por objeto solamente obtener el regreso de Pinochet. Sin negar la fuerza de esta motivación, creo que concurrieron también algunas razones más de fondo.

Habían pasado 25 años desde el golpe de 1973 y una nueva generación de militares había llegado al mando de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, una nueva generación de políticos venía dirigiendo los destinos de los partidos de derecha. Todos ellos mantenían una lealtad con el gobierno militar y sus líderes. Sin embargo, se había hecho evidente que el problema de los derechos humanos y en especial el de los detenidos desaparecidos, lejos de disiparse, se tornaba más intenso con el paso del tiempo, perpetuando la división entre los chilenos y cuestionando a las Fuerzas Armadas en su conjunto. Ello era visto como un serio riesgo para la unidad del país y para la necesaria inserción plena de las Fuerzas Armadas en la sociedad.

Quiero creer y creo, también, que aparte de las consideraciones institucionales o políticas, los nuevos dirigentes civiles y militares no podían permanecer insensibles al drama de los detenidos desaparecidos.

La ausencia de Pinochet de la escena política nacional permitió que estas nuevas generaciones de uniformados y políticos pudieran manifestarse de manera más libre y gravitante. Es así como a comienzos de 1999 comenzaron a oírse opiniones de altos mandos militares y de personeros políticos de derecha que directamente señalaban la necesidad de dar respuesta a los familiares de los detenidos desaparecidos. A partir de ello se hicieron contactos con el gobierno y se iniciaron conversaciones exploratorias (en las cuales me tocó participar) para determinar hasta dónde había bases para un acuerdo.

Hacia julio de 1999 estaba claro que de los tres problemas pendientes señalados más arriba,



1609 - 3

había posibilidades de lograr entendimiento acerca de un reconocimiento moral sobre las responsabilidades del pasado y en torno a mecanismos efectivos para encontrar los restos de los desaparecidos; si ello no era posible, al menos era preciso determinar su suerte o destino. También estaba claro que no se debía propiciar ni un punto final ni una interpretación de la ley de amnistía por parte de los poderes políticos.

Sólo a los tribunales correspondería decidir sobre la interpretación y aplicación de la amnistía, una vez que se supiera la verdad de lo ocurrido.

Estas líneas generales de acuerdo necesitaban, sin embargo, precisarse, pues todavía subsistían importantes puntos de discrepancia. Para ello hacía falta un impulso de parte del Gobierno.

Es entonces cuando entra en escena Edmundo Pérez Yoma, una vez que fue nombrado nuevamente como Ministro de Defensa. La Mesa de Diálogo que propició fue, sin duda, una iniciativa audaz. La idea de sentar cara a cara a militares, abogados de derechos humanos, representantes del Gobierno, autoridades de entidades religiosas y éticas, así como otros representantes de la sociedad civil, respondía a dos intuiciones. La primera consiste en confiar en la capacidad de entendimiento entre personas de buena voluntad que conversan frente a frente, aunque partan de posiciones aparentemente irreconciliables. La segunda es la percepción de que sólo se puede avanzar hacia la reconstrucción ética de la Nación a partir de la participación activa de todas sus fuerzas institucionales, políticas, morales y sociales.

La historia de los nueve meses de trabajo, con más de veinte sesiones plenarias, algunas de ellas maratónicas, además de interminables consultas y trabajos de comisiones redactoras, daría para escribir un fascinante libro de memorias. Estoy seguro que muchos de los participantes lamentan, como yo, no haber tenido la visión y la disciplina de mantener detalladas notas o de grabar impresiones sobre cada reunión.

Los libros o artículos que alguna vez se escribirán no darán cuenta solamente de un vasto y rico anecdotario. Estoy cierto que podrán contribuir significativamente al cuerpo de conocimientos sobre dinámica de grupos, diálogo y resolución de conflictos, en particular en materia de derechos humanos.

Nuestras sesiones comenzaron de un modo solemne y rígidamente formal, con una exposición global y por escrito de parte de cada una de las 18 personas convocadas por el Gobierno. Este proceso tomó varias semanas. Mirado retrospectivamente, fue un inteligente procedimiento. Le permitió a cada participante desplegar el conjunto de sus visiones personales o institucionales, lo que dio sentido, después, a sus intervenciones más concretas. Paralelamente, fue dándonos tiempo para empezar a conocernos y respetarnos.

Muy pronto quedó establecido que efectivamente los dos temas que debíamos abordar eran los señalados más arriba: el reconocimiento de responsabilidades por el pasado reciente y un acuerdo sobre mecanismos que pudieran ser efectivos para encontrar los restos o para determinar la suerte de los detenidos desaparecidos. Para algunos, el segundo problema era el principal, al punto que si sólo se lograba acuerdo sobre él, se habría cumplido nuestra misión. Para otros, ambos temas se referían a cuestiones medulares en la necesaria tarea de refundación moral, aunque la tragedia de los desaparecidos era el más apremiante.

"La completa superación de esos hondos traumas nacionales puede tomar mucho tiempo, incluso el paso de dos o más generaciones"



El abogado José Zalaquett junto a otros dos integrantes clave de la Mesa de Diálogo: Sergio Valech y Edmundo Pérez



La mesa se tambalea: Pinochet llega a Chile



El error de Pérez Yoma: el ex ministro "filtró" un acuerdo de la mesa en el consejo ampliado de la UDI

El estilo de trabajo enfatizó la más amplia transparencia. Con la excepción del compromiso de no comentar las opiniones de otro ni de revelar el contenido de documentos de trabajo, cada cual podía hacer las declaraciones públicas que quisiera (por razones obvias, los militares tenían restricciones a este respecto).

Confieso que este acuerdo me mereció reservas, las que podrían verse justificadas si recordamos algunos episodios de debate público que parecieron poner en peligro la Mesa. Pero, a fin de cuentas, creo quienes propusieron ese método de trabajo tenían razón. Como ha dicho Héctor Soto en este diario, no podemos desconocer que la plaza pública se ha trasladado, en gran medida, a los medios de comunicación y era de fundamental importancia que el país estuviera involucrado en nuestro proceso de diálogo.

La Mesa no operaba en una burbuja, ajena a los avatares de la política nacional. Fue afectada en su ritmo de trabajo y en la misma posibilidad de llegar a acuerdos por el regreso de Augusto Pinochet y el posterior proceso de desafuero a que fue sometido. Sin embargo la Mesa tenía su propia dinámica y supo abstraerse de estas realidades en la medida suficiente para seguir funcionando.

Pienso que lo que la mantuvo viva fue la firme determinación de todos sus participantes de no levantarse de ella, cualesquiera fueran las tensiones y obstáculos, mientras quedara una esperanza de acuerdo.

Para que esa determinación pudiera mantenerse era preciso algo más que la convicción compartida sobre la importancia de nuestra tarea. Se necesitaba, también, de un clima humano propicio. Este se fue forjando de modo gradual pero seguro, hasta el punto que cada uno de nosotros puede decir (yo ciertamente así lo siento) que desarrollamos lazos de mutuo respeto y de sincero aprecio. Para ello fue fundamental hablar en verdad.

"La declaración de la Mesa no fue perfecta ni mucho menos (...) Sin embargo, quisiera pensar que estas falencias la hacen más creíble, más humana"

Las posiciones podían ser firmes y contrapuestas, pero nunca escuché a nadie emitir un juicio que constituyera un agravio al sentido común o a la inteligencia de sus interlocutores. Además, el paso de las horas, los días y los meses, la pasión, el cansancio y la necesaria informalidad de las pausas, fueron dejando salir las distintas facetas de nuestra humanidad, permitiéndonos reconocernos en la humanidad del otro.

De este modo se fue diluyendo en ese pequeño microcosmos de la Mesa la más peligrosa de las barreras, esa que separa categóricamente a "nosotros y ellos", perpetuando divisiones y conflictos.

La declaración de la Mesa no fue perfecta ni mucho menos. Hasta bien entrada la madrugada de la noche del acuerdo final, subsistían las discrepancias. Aquí y allá quedaron algunas imprecisiones conceptuales que han sido destacadas por algunos críticos. Sin embargo, quisiera pensar que estas falencias la hacen más creíble, más humana, y que el país está prestando atención al espíritu que emana de ella, antes que a su tenor literal.

Se ha destacado, con razón, la importancia del reconocimiento de responsabilidades que la declaración contiene. Quizás pudiera haber sido más explícito o más completo. Pero es honesto y claro. Es también inédito y trascendente, más que por su contenido (que no sorprende a nadie), por el amplio y expreso consenso nacional en torno a cuestiones fundamentales de ética política.

La ceremonia de recepción de esta declaración, en el Palacio de la Moneda y con amplísima participación del Chile institucional, político, religioso, moral y social, parecía uno de esos cuadros históricos que cuelgan de los museos donde se ve una aglomeración de personajes en el instante de alguna gran ocasión patriótica. Era la imagen comunicacional de la voluntad de refundación moral.

La fórmula que se propuso para determinar la suerte o paradero de los detenidos-desaparecidos, significa que todos han aceptado un riesgo significativo. Las Fuerzas Armadas y Carabineros se comprometen solemnemente a desarrollar, en un plazo de seis meses, los máximos esfuerzos posibles para obtener la información relevante. Quienes la reciban estarán amparados por el secreto profesional. Pasado ese tiempo el Presidente de la República evaluará los resultados y podrá prorrogar el plazo o impulsar medidas complementarias.

Si el país percibe que esa fórmula no dio resultados, ello afectará la credibilidad de las Fuerzas Armadas y Carabineros, del gobierno y de la propia Mesa. Sin embargo, en el espíritu de entendimiento que alcanzamos, es perfectamente consecuente que hagamos un acto de confianza, a la vez que colaboremos todos en ese esfuerzo.

Las declaraciones recientes de algunos altos mandos militares en el sentido de que se proponen emprender esa tarea lo antes posible y con la máxima determinación, es el signo más alentador que podríamos esperar después de nuestro acuerdo. ■